

El problema agrario, la economía cocalera y el conflicto armado*

Por Teófilo Vásquez**

* Artículo recibido en marzo de 2009.

Artículo aprobado en junio de 2009.

** Sociólogo, investigador del Cinep.

Introducción

Las explicaciones recientes sobre los conflictos armados contemporáneos insisten, con diversos matices, en la estrecha relación de las guerras internas y los recursos. Especialmente en aquellos países cuyos ingresos dependen de la exportación de bienes primarios, donde la “depredación” de estas rentas se convierte en la condición de posibilidad y permanencia de los grupos armados (Collier, 2001). Para estas argumentaciones las guerras actuales son una disputa armada por el control de recursos naturales y sus rentas, lo que implica que, ahora, la guerra es la economía por otros medios (Kaldor, 2001; Münkler, 2005; Elwert, 2003; Kalulambi, 2003 y Richani, 2003a y 2003).

En ese sentido se resalta la relación entre las guerras contemporáneas y los procesos de globalización de las economías, tanto legales como ilegales, ya que la globalización permitió el paso de una economía cerrada de guerra, en la cual los actores se disputaban una producción agraria de subsistencia, a una economía abierta de guerra, donde los grupos armados pugnan por el acceso a los mercados globalizados (Kaldor, 2001 y Münkler, 2005).

Sin embargo, ese “giro económico” deja de lado los arreglos políticos y el papel del Estado en las relaciones que se establecen entre estas economías y los grupo armados (Gutiérrez y Barón, 2008). Y aún más: su énfasis sincrónico desconoce que el entramado del narcotráfico y el conflicto armado tiene un trasfondo histórico: el problema agrario todavía no resuelto.

De nuestra parte, insistimos en que la relación actual entre coca y conflicto debe ser explicada teniendo en cuenta los antecedentes históricos del problema agrario, y plantearse que el narcotráfico no es solamente la “causa eficiente de la guerra” sino una nueva etapa del modelo agromonoexportador. Para sugerir que la cocalización de varias economías regionales ha tenido en Colombia –guardadas las proporciones– implicaciones similares a las que tuvo el café en su momento, pero con una enorme diferencia: este segundo despegue de la economía agroexportadora se ha realizado con base en un cultivo declarado proscrito a escala internacional.

Igualmente, se trata de interpelar a la explicación según la cual el proceso de inserción de los grupos armados en la economía de las drogas les ha permitido, simple y llanamente, la obtención de mayores recursos y por ende el crecimiento numérico de sus ejércitos y el perfeccionamiento sustancial de su infraestructura militar. Ya que, al lado de ese objetivo, siguen jugando los “deseos” y los “modelos” de sociedad que los grupos armados quieren imponer a la sociedad colombiana en el orden cultural y político.

Hay que constatar que existe un proceso desigual y diferenciado de inserción de los grupos armados en las diferentes etapas de la cadena productiva (cultivo, producción y comercialización) de las economías regionales de la coca.

De igual manera, hay que mostrar que las relaciones económicas y sociales concretas establecidas en las regiones cocaleras tienen una estructura social diferenciada y desigual en la distribución de sus beneficios.

El problema agrario, las transformaciones del mundo campesino y la violencia política

Este aparte no pretende elaborar un exhaustivo estado del arte sobre la relación entre violencia y problema agrario¹. Solo resaltar los problemas claves de la relación entre la cuestión agraria y los actores armados, para sugerir que existe una estrecha relación entre la inserción de los actores armados y las estructuras sociales agrarias, y enfatizar de manera especial, aunque no exclusiva, en “el problema clásico de la oposición entre agricultura campesina y agricultura capitalista” (Zamosc, 1992, 36) y sus expresiones en el ámbito político. Precisamente en esa dirección cabe tener en cuenta que la forma en que una sociedad resuelva el problema campesino tendrá consecuencias en las instituciones políticas que esa sociedad adopte (Moore, 1973, 10).

En ese sentido, queremos subrayar la interacción entre determinadas estructuras sociales agrarias regionales y la proclividad que ofrecen para la articulación o inserción en sus tensiones, en los fines e intereses políticos, sociales y económicos de los actores armados que operan en Colombia (González, Vásquez y Bolívar, 2003)².

Es sabido que una de las características del sector agrario colombiano es su estructura dual o bimodal, es decir, la presencia simultánea de la agricultura comercial con la agricultura campesina (Zamosc, 1992, 46-50, 56, 63; Machado, 1998, 12, 46, 168 y 2002, 37-44; Bejarano, 1998, 49, 59-65³; Jaramillo, 2002, 11, 40-42, 52). Esta característica reduce la presencia y la posición de la clase media en el campo, cosa que se acentuó en el periodo 1984-1996 (Machado, 1998, p. 64, 69, 187 y 2002, p. 38, 40), e impone además “severas restricciones

¹ Bejarano anota que los estudios económicos del tema agrario están debilitados, ya que la atención se concentra en aspectos macroeconómicos y de coyuntura (1998, viii). En el libro de referencia el autor se ocupa de la definición y delimitación conceptual del problema agrario (Bejarano, 1998, 47-87).

² Aspectos en los cuales también enfatiza Cristóbal Kay (2003), en un artículo sobre la estructura agraria y la violencia en América Latina, donde compara los casos de Chile, Perú, Colombia, Brasil y México.

³ En este texto se realiza una presentación conceptual sobre lo que este autor denomina “la estrategia bimodal y la vías de desarrollo de la agricultura” (Bejarano, 1998, 59-65).

al desarrollo de fuertes mercados rurales para los productos de las industrias nacionales” (Bejarano, 1998, 49). Tal dualidad nos permitió establecer una relación entre dicha estructura y los orígenes, trayectorias y condiciones de expansión de los actores armados, al indicar que el actual conflicto del país es la expresión armada de los intentos de imposición de uno de los dos bandos de la denominada estructura dual (González, Vásquez y Bolívar, 2003, 64-71).

Para desarrollar este argumento es necesario analizar las consecuencias políticas que han tenido los cambios operados en el sector rural colombiano y en particular su relación con la consolidación y expansión de los actores armados. O, desde otra perspectiva, verificar que el conflicto armado es la expresión más aguda de la cuestión agraria, interpretada como crisis de las relaciones entre la sociedad mayor y la sociedad rural, así como de unas instituciones estatales calificadas como inadecuadas, poco sólidas e inflexibles⁴. Se considera que estos factores impiden un desarrollo sostenible, la creación de reglas del juego y de políticas de largo alcance que faciliten el desarrollo de los mercados y una sociedad rural más equitativa e incluyente (Machado, 1998, 21-22, 29, 31; Machado y Samacá, 2000. 49-300)⁵. Lo cual terminó por establecer un diferencial de representación política muy grande, no solo en el seno de la sociedad rural sino igualmente en la relación de ésta con la sociedad mayor, que se constituye en un obstáculo para el desarrollo (Machado, 2002, 36-37,41).

En los años ochenta y noventa, ante el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, se impone el patrón orientado a enfatizar las exportaciones, disminuir la función del Estado en la promoción del desarrollo y exaltar el papel del sector privado. Esto tuvo efectos contradictorios en la agricultura colombiana, de los cuales resaltamos algunos. De un lado, la eliminación de las medidas tributarias y la adopción de un régimen neutral en el campo macroeconómico significaron el fin del papel secundario que desempeñaba la

⁴ O bien muy flexibles, por la adecuación que de éstas realizan los poderes locales políticos y armados.

⁵ En este libro se realiza examen detallado de las instituciones públicas y privadas del sector agrario y sus transformaciones recientes.

agricultura en el esquema anterior. Sin embargo, la eliminación de los factores y las medidas que restringían el mercado no se tradujo en los beneficios que se esperaban para el sector agrícola exportador, debido a la disminución de los precios internacionales de los cultivos de exportación y especialmente a la apreciación de la tasa de cambio. El nuevo paradigma no tenía nada que decir ante graves problemas como la pobreza rural y el atraso tecnológico de la agricultura campesina. Y todavía peor: las operaciones de ajuste estructural y el déficit fiscal implicaron la reducción sustancial de los programas sociales y de desarrollo rural. Finalmente, se avanzó poco en la reducción de los costos ambientales de las actividades agrícolas (Jaramillo, 2002, 32-34).

Estas transformaciones acentuaron todavía más la estructura dual o bimodal que ha caracterizado el desarrollo rural colombiano (ibí., 52), que, como ya indicamos, resulta central para explicar las interacciones entre el problema agrario y el conflicto armado que soporta el país. Esto hace necesario profundizar en dicha caracterización.

En primer lugar, la desigualdad en la posesión de la tierra ha sido factor fundamental en la configuración de estos dos tipos de agricultura (Machado, 1998, 45-102): de un lado, la agricultura comercial, en la cual las fincas cuentan con grandes extensiones de tierras de buena calidad, utilizan tecnología moderna, contratan mano de obra y venden su producción en los mercados formales, y, del otro lado —si se quiere, opuesto—, están los pequeños propietarios, cuyas posesiones se sitúan en las zonas de ladera, en tierras de baja fertilidad, situadas por fuera o alejadas del sistema vial más integrado, que aplican tecnologías atrasadas y gran parte de cuya producción se utiliza para el consumo familiar o va a mercados informales del ámbito local (Jaramillo, 2002, 41; Machado, 1998, 91-93).

Esa estructura dual es, en gran parte, responsable de la pobreza rural del país (Machado, 1998, 188-192), que, si bien registra una situación moderada en comparación con otras naciones latinoamericanas, mantiene una distribución atípica de la pobreza rural-urbana: en 1992 la pobreza rural era 3,6 veces ma-

yor que aquella de las áreas urbanas, una proporción que supera la registrada en otros países de la región (Jaramillo, 2002, 42). Tal pauta bimodal, unida al desarrollo paralelo, implicó “una territorialización diferencial marcada por el predominio del campesinado en las montañas y del capitalismo agrario en las planicies” (Zamosc, 1992, 63).

Ella explica también las interacciones entre el ámbito político e institucional, el conflicto armado y el problema agrario, ya que “La mencionada tendencia regresiva en la distribución de la tierra no tiene otra explicación que la permanencia de la tierra como un activo de reserva de valor que anhela permanentemente la búsqueda de rentas institucionales, y el uso de la tierra como un activo de poder regional y local que genera dividendos políticos” (Machado, 1998, 82)⁶.

Las transformaciones de los años noventa

Fueron diversos los cambios que se verificaron en el sector agrario en la década de 1990. Queremos enfatizar en aquellos que tuvieron implicaciones más directas en las dinámicas del conflicto armado colombiano, ya que se busca establecer las relaciones que en ese decenio tuvo el proceso de apertura económica en la inserción de la economía del narcotráfico y su impacto en la consolidación del proyecto paramilitar y guerrillero.

En primer lugar, para comienzos de los años noventa, cuando aún no era tan determinante el peso del narcotráfico en el sector agrario, resultaba patente “El afianzamiento de una pauta de división del trabajo dentro de la cual el campesinado se especializa en alimentos para el mercado interno, y el capitalismo agrario en productos para la industria y exportación” (Zamosc, 1992, 46). Todavía se mantenía la estructura dual en relación con la propiedad, la tenencia de la tierra y la correspondiente distribución espacial y territorial de

⁶ Similar relación entre el poder político regional, la gran propiedad rural y su problemática interacción con los sistemas formal e informal es comentada brevemente por Ocampo (2004, 83).

esa estructura bimodal⁷. Y, finalmente, ya se advertía —a diferencia de lo que ocurría en las décadas pasadas— un proceso de diferenciación del campesinado (Zamosc, 1992, 46-47).

En segundo lugar, y como balance de la década, debe destacarse el contraste entre el leve aumento de la producción de los cultivos transitorios y permanentes, que en el periodo 1990-1997 crecieron solo en 1,5%, proporción que se compara con la de expansión de la producción pecuaria, que fue de 30,3% durante el mismo periodo (Jaramillo, 2002, 160; Fajardo, 2002, 11 y 2005, 75-79). Es decir, ocurría un proceso de ganaderización que, de la mano del proceso de emergencia de sectores vinculados al narcotráfico, implicó la aparición de una nueva etapa, que se ha denominado como *neolatifundismo o relativityndización* (Fajardo, 2002, 11-16). También se destaca el acelerado crecimiento de la producción de aceite del palma, que llevó a Colombia a convertirse en un país autosuficiente y exportador de ese producto desde 1993 (Jaramillo, 2002, 158).

En tercer lugar, se produjo un deterioro de los indicadores sociales, como el aumento de la tasa de desempleo rural, que pasó de 4,2% en 1991 a 6,5% en 1997, al lado de un mejor desempeño de indicadores como el de línea de pobreza y el NBI, ya que la primera disminuyó de 36% en 1988 a 26,2% en 1995 y el segundo de 37,4% en 1991 a 31,5% en 1995 (Jaramillo, 2002, 188-189; Fajardo, 2002, 16-17 y 2005, 78-79).

Finalmente, el cambio más directamente asociado al conflicto armado se relaciona con el auge del “narcotráfico” o de las economías regionales cocaleras y amapoleras, en la medida en que las cifras de 1995 “sitúan la coca como la quinta actividad agrícola de mayor valor, después de la ganadería, la avicultura, el café y la caña de azúcar” (Jaramillo, 2002, 193). Sin embargo, es todavía objeto de gran controversia el impacto del denominado narcotráfico sobre la economía en general, y en particular sobre el sector agrario. De un lado, se indica que el cultivo, la producción y la comercialización de la coca y la amapola

⁷ En este punto nos acogemos a la siguiente definición de Fajardo: “Tierra y territorio son dos conceptos íntimamente ligados. Por tierra se entiende la base física y productiva de un territorio. Por territorio se entiende el conjunto de relaciones y representaciones que se construyen a partir de la tierra” (Fajardo, 2002, 21).

implicaron para la economía agraria legal una competencia por insumos —como mano de obra y tierra—, mayores costos asociados a la violencia, menores incentivos a las actividades transables debido a una tasa de cambio más apreciada, y menor disponibilidad de recursos públicos como resultado de su desviación hacia la lucha antidrogas. De otro lado, se anota que, en la medida en que los cultivos y la producción de coca y amapola se ubicaron en regiones periféricas con respecto al modelo de desarrollo agrario realmente existente, dichas actividades no representaron una competencia importante por tierras para la agricultura convencional (Jaramillo, 2002, 194). Sin embargo, es necesario resaltar que el auge del cultivo y la producción de coca y amapola trajo consigo cambios y transformaciones en los sectores sociales que presuntamente son la “base social” de guerrilleros y paramilitares: en el primer caso, mejorando parcialmente las condiciones materiales de colonos y campesinos y estabilizando el proceso colonizador. O sea, ayudaron a la constitución de economías viables en la retaguardia. Y, en el segundo caso, porque produjo una sustitución o simbiosis entre terratenientes tradicionales y nuevos capos de la droga mediante la compra masiva de tierras, que favoreció la valorización de éstas y el fortalecimiento de la ganadería extensiva (Jaramillo, 2002, 195 y 197; Fajardo, 2002, 18).

Lo anterior permite explicar las relaciones entre el “narcotráfico”, los actores armados y sus respectivas mediaciones sociales, rebatiendo el argumento que reduce el actual conflicto armado a una disputa por recursos del narcotráfico para financiar la guerra. Por eso es necesario detenerse a examinar las trayectorias diferenciadas que pueden adquirir las relaciones entre la economía agraria, la política y los actores armados, ya que en muchos casos se trata de una lógica de captadores de rentas a ultranza, a la que se añadirían con posterioridad algunos motivos políticos en calidad de justificación, como es el caso de los paramilitares (Cubides, 2005, 225). Por el contrario, la ruta de la guerrilla es asimétrica: en un principio se trató de una justificación política que recientemente ha devenido en una lógica de captadores de rentas.

Un ejemplo evidente es la crisis de la economía cafetera en la década de los años noventa, que implicó que en las regiones mayormente instaladas en el desarrollo

económico e institucional se dieran condiciones favorables para la rápida inserción de los actores armados (Franco, 2006). Este caso de involución es más evidente en el occidente de Risaralda, en límites con el Chocó, en Caldas y el sur de Antioquia –enclavado en la cordillera Central–, cuyas importantes zonas de bosques se han convertido en la retaguardia de los grupos guerrilleros, especialmente de las Farc. O en el caso del Cesar, donde la apertura económica indiscriminada de principios de los años noventa afectó muchos procesos de consolidación de la economía agroindustrial que estaban siendo relativamente beneficiados por el Estado, con su política económica agraria de tipo proteccionista. En ese Departamento la crisis económica y la emergencia de los señores del narcotráfico terminaron por producir una fusión entre las elites tradicionales y las elites emergentes, que tuvo como resultado la consolidación paramilitar (Bernal, 2004a y 2004b), es decir, lo que actualmente se conoce como la “parapolítica”.

En síntesis, en el decenio de los noventa, ya en el contexto de la globalización, se aceleró el proceso de relativo reemplazo de las estructuras agrarias tradicionales por sistemas agroindustriales (Machado, 2002, 61-203) y por enclaves rurales basados en actividades económicas legales e ilegales, lo que propició la expansión de los grupos armados. Estos sistemas agroindustriales son definidos como “el conjunto de relaciones y procesos en el que se involucran los productores agropecuarios y sus agentes económicos y sociales, en el recorrido de sus productos desde la producción primaria hasta el consumidor final, incluyendo las relaciones de la agricultura con los proveedores de insumos, maquinaria, semillas, tecnología, servicios e información” (Machado, 2002, p. 217). En esa nueva etapa, todavía en conformación, pierden poder político y social los terratenientes y lo ganan los agroindustriales vinculados con el sector financiero y tecnológico (Machado, 2002, p. 221).

Transformaciones del mundo campesino y guerrillas

La relación entre las transformaciones del mundo campesino y las guerrillas debe enmarcarse dentro de una perspectiva comparativa con otras sociedades del Tercer Mundo, donde la mayoría de los análisis relacionan el desarrollo de

la modernización capitalista agrícola con los procesos de descampesinización, pero no solo en términos económicos sino también de los procesos políticos y sociales que se desatan de esta transición del desarrollo rural. En el caso de Colombia, esta transición y tensión entre la gran propiedad agrícola y ganadera, la economía campesina y la ampliación de la frontera agrícola por la vía de colonización, vista como una fórmula de “válvula de escape” de la presión sobre las tierras incluidas en el desarrollo nacional, se ha realizado a partir de diversas modalidades de violencia, que han terminado por convertirse en fenómenos crónicos. Esto tiene como expresión más nítida los ciclos de colonización-conflicto-colonización. Se trata, sin duda, de la controversia sobre “si la agricultura colombiana debe estar basada en la agricultura comercial o en pequeñas unidades campesinas, o si en el desarrollo de Colombia predomina la producción agrícola comercial o la campesina. En esta controversia se llega a sostener que la existencia de ciertas formas de producción, como la economía campesina, son un obstáculo a la modernización del país” (Mondragón y Valderrama, 1998, 67).

Por esto, la relación entre campesinado, cambio social, lucha armada y revolución ha ocupado buena parte de los esfuerzos de la bibliografía secundaria sobre el mundo agrario latinoamericano y colombiano. En las ciencias sociales colombianas, estas dinámicas de violencia, su relación con los procesos de colonización y los problemas del sector campesino son ya un tema reiterativo y prácticamente dado por sabido, aunque, como afirma Machado, “se especula mucho sobre las sociedades campesinas, la investigación socioeconómica sobre el sector está estancada y las cargas ideológicas del pasado todavía pesan en muchos actores y organizaciones” (Machado, 1998, 1994). Aún más, como anotan Salgado y Prada, el énfasis en el problema de las zonas de colonización, y su dinámica colonización-conflicto-colonización descuidan lo que pasa dentro de la frontera agrícola interna de las zonas ya integradas (Salgado y Prada, 2000, 123).

En ese sentido, como afirma Christian Gross, insistir nuevamente sobre la relación entre los campesinos de las zonas de colonización y los de las zonas

de ladera de las cordilleras con el conflicto armado puede tener el riesgo de reforzar la imagen unilateral del agro latinoamericano como lugar de todas las violencias (Gross, 2004, 107). Por otro lado, también conviene debatir la visión opuesta, la de un mundo rural marcado por valores comunitarios y habitado por una población campesina e indígena pobre pero tranquila. Se trata entonces de superar las dos concepciones opuestas, tanto las que presentan a los campesinos como víctimas como las que los identifican como actores que han optado voluntariamente, por convicción propia, por una alianza con los grupos armados (ibíd., 109).

En cambio, como lo muestra Gross en su estudio comparativo de algunas regiones de Colombia y Perú, la relación entre campesinado y opción armada ha sido disímil y heterogénea. En algunas regiones, como Guaviare (Colombia) y Huallaga (Perú), la guerrilla ha encontrado un grado de legitimidad mayor que el Estado, pero en otras el apoyo campesino ha sido más bien precario, lo que ha obligado a la guerrilla a emplear, no pocas veces, su fuerza contra los campesinos (ibíd., 149). En otras regiones, muy por el contrario de la pretendida alianza, los mismos campesinos prácticamente se han alzado contra la guerrilla y han decidido tomar las armas contra ella, como en los casos del Magdalena Medio o de las rondas campesinas del Perú (ibíd., 150; De Gregori, 1999). La distancia respecto a la guerrilla es todavía mayor “cuando se trata de comunidades campesinas sólidamente estructuradas o de poblaciones indígenas” (Gross, 2004, 151), como ocurre en las zonas andinas colombianas del norte de Cauca y Tierradentro.

Pasar por alto estas diferencias puede obedecer a que tal vez no tenemos en cuenta que, como señala Gross, si bien las guerrillas son en buena parte rurales, están lejos de ser siempre campesinas. Esto implica que, en últimas, ellas sean vistas siempre como un factor ajeno y externo a los campesinos de las regiones, donde “el manual revolucionario” les decía que deberían insertarse (ibíd., 150). Más bien se trata de detenerse con detalle en la tensión que se ha establecido entre las aspiraciones de incorporación política de la protesta campesina y su coincidencia con la geografía de la guerrilla, para explicar por

qué en la actualidad, tal como lo indicó Zamosc para comienzos de los años noventa, “Esta orientación incorporativa no podía ser politizada en el marco de un proyecto de revolución armada” (Zamosc, 1992, 61).

Las anteriores distancias señaladas —es decir, la relación entre campesinado, cambio social, lucha armada y revolución— hacen que en la Colombia contemporánea no podamos seguir reiterando la concepción clásica del *mundo campesino* y sus relaciones con la política y la economía. En muchos casos las economías campesinas han conformado sistemas abiertos en procesos de continuo cambio que han avanzado hacia el cosmopolitismo y hacia una intensificación de sus relaciones con los diferentes procesos de globalización (Machado, Prólogo; Salgado y Prada, 2000, 12). Para usar la metáfora de Salgado y Prada, se trata de la dificultad de explicar por qué los campesinos “no sobreviven sino que duran”, a pesar de las condiciones adversas de carácter económico existentes en el mundo contemporáneo, a las cuales, en Colombia, se les suman los altos niveles de violencia (Salgado y Prada, 2000, 17; Mondragón y Valderrama, 1998, 68-74).

Es decir, que actualmente en Colombia “predomina un campesinado integrado al mercado, que ha venido introduciendo intensos cambios en sus sistemas productivos para adaptarse a la creciente demanda de productos agropecuarios, tanto nacional (todo tipo de alimentos) como internacional (tabaco, café, marihuana, coca, amapola...). Es claro entonces que no tiene nada que ver con la preconcepción de un campesinado tradicional arcaico y refractario al cambio” (Varios autores, 2002, 28), sino de campesinos que han logrado resistir, debido precisamente a su particular composición, ya que, como afirma Lock para otros casos en el mundo, “Los modos de producción de pequeños agricultores disponen de una habilidad extraordinaria de adaptación, son muy resistentes frente a disrupciones y constituyen, por tanto, una reserva de sobrevivencia altamente elástica” (Lock, 2003, 3).

Lo anterior no ha hecho otra cosa que intensificarse y hacerse más veloz con la implantación de la coca y la amapola en las economías globales, que per-

mitió la aparición de un tipo de campesinado que se aleja de la descripción de la literatura clásica sobre el tema, que suponía una economía campesina en permanente crisis que apenas lograba sostenerse por encima del umbral de la supervivencia, o de la visión del colono pionero autosuficiente y por fuera de otras dimensiones económicas y sociales⁸. Ya que uno de los cambios fundamentales provocados por la introducción de la coca en un medio de campesinos colonos se relaciona con el hecho de que este cultivo se comporta más como una economía extractiva unida al gran capital, que como un cultivo colonizador (Domínguez, prólogo a Cubides, Mora y Jaramillo, 1986, XIII). La acelerada monetización, y sus consecuencias, así como los cambios en los hábitos de consumo y gasto, produjeron transformaciones en las identidades campesinas y en su relación con la política, y en especial con la agenda revolucionaria de la guerrilla. Cabe anotar que las importantes alteraciones provocadas por los procesos de globalización agenciados por las economías, tanto legales como ilegales, no obstan para que en muchas regiones cocaleras sigan todavía persistiendo relaciones económicas como la de los “medieros”, que son campesinos en una situación similar a la del arrendamiento de tipo precapitalista.

Este cambio de la situación se expresa también en la esfera política de las movilizaciones sociales, de la protesta campesina, que experimenta cambios en su repertorio de acciones y en sus interacciones con el conflicto armado.

Otra cosa es el repertorio activo y politizado de los años sesenta y setenta, en muchos casos orientado por las organizaciones políticas de izquierda y que tuvo dos etapas: en un primer momento, enmarcadas en las intenciones reformistas del gobierno de Lleras Restrepo, que buscaba socavar los intereses de los terratenientes y organizar a los campesinos como un mecanismo para “saltarse las redes clientelistas de ambos partidos y establecer un nexo directo entre Estado y campesinado” (Zamosc, 1992, 51), y luego, en un segundo

⁸ Un resumen ilustrativo de los enfoques conceptuales sobre el campesinado y el subdesarrollo se puede consultar en Mondragón y Valderrama (1998, 14-20).

momento, enfrentadas abiertamente a las políticas contra-reformistas de los gobiernos de Pastrana y López.

En el caso de la Anuc, sin duda la organización más representativa del periodo, estas movilizaciones culminarían lánguidamente, ya que, como sostiene Zamosc sobre la trayectoria de esta organización, “los campesinos se valieron del poder de clase que había cristalizado en esa organización para tratar de definir a su favor la vía de la evolución agraria en Colombia, y en ese intento fueron derrotados” (Zamosc, 1992, 53).

En síntesis, en esas dos décadas los derechos reclamados tenían que ver especialmente con el derecho a la tierra. Entonces el repertorio era competitivo, porque sus acciones pedían igualdad de derechos frente a los terratenientes, pero en los años setenta la lucha se tornó reactiva cuando el contrarreformismo revocó los derechos instituidos en los sesenta (Salgado y Prada, 2000). Para la década de 1970 cabe destacar que el auge de la movilización campesina contrastaba con la crisis de las guerrillas del ELN y el estancamiento de las Farc y el EPL (Zamosc, 1990, 339).

En los años ochenta, la geografía de la protesta campesina tiende a coincidir con la distribución espacial y territorial del conflicto armado, en la medida en que, “En relación con los escenarios, se ve claramente que las regiones más prósperas, los valles interandinos y la zona cafetera fueron los menos afectados por la protesta. La agitación se concentró en otras zonas andinas, la costa atlántica y áreas marginales y de colonización” (Zamosc, 1992, 57). En ese mismo decenio se establece definitivamente una estrecha relación entre la protesta campesina y las vicisitudes de la paz y la guerra: de un lado, ceden terreno las protestas por motivos económicos y comienzan a tener mayor peso las protestas y acciones contra la violencia y la represión oficial en el campo; pero también, en el contexto de las negociaciones con Betancur, “los insurgentes se esforzaron por emular el modelo de lucha cívica y pacífica y ganar espacio como representantes de las aspiraciones de los campesinos de sus regiones en su propio proceso de reincorporación a la vida política legal”

(Zamosc, 1992, 59). En resumen, en la década de los ochenta los campesinos se movilizaron por “tierra, por desarrollo de las regiones marginales, contra la represión y por la defensa de su economía en las regiones minifundistas” (Zamosc, 1990, 330).

Por otro lado, los intentos de los grupos guerrilleros de pasar de la coincidencia geográfica en zonas marginales y de colonización a una alianza más orgánica con expresiones políticas y sociales de alcances nacionales —esfuerzo que tendría su mayor expresión en la marchas de finales de los años ochenta— se enfrentarían con dos tensiones: en primer lugar, la diferencia, que ya señalamos, entre los objetivos incorporativos de los campesinos y las pretensiones contraestatales de las guerrillas (ibíd., 336-350); en segundo lugar, la ambigüedad con la cual las guerrillas se relacionaban con los campesinos, ya que existía una brecha muy grande entre las pretensiones más orgánicas y políticas de relación con la organizaciones y la dirigencia campesina en el ámbito nacional, y las prácticas más mecanicistas e instrumentales que las guerrillas establecían con los campesinos en los espacios regionales y locales (ibíd., 345-350, 369-370).

Otra característica es el carácter reactivo de las acciones y movilizaciones de los años noventa. En este decenio la gran mayoría de las movilizaciones tuvo como punto central los derechos humanos, pero no como una forma de desarrollarlos sino, simple y llanamente, como una reivindicación que les permitiera en lo posible la defensa de sus vidas.

Aquí ponemos de presente una discusión interesante: se ha indicado que los denominados nuevos movimientos sociales se caracterizan por trascender las reivindicaciones materiales y poner de presente las condiciones culturales y simbólicas, como ocurre con el movimiento *gay*, el ecológico, los movimientos por la paz y los derechos humanos. Sin embargo, en Colombia este dato podría ser engañoso, pues la reivindicación actual, centrada en los derechos humanos, no puede interpretarse como un avance, sino simplemente como una reacción ante los niveles de violencia de guerrilleros y paramilitares. Es de-

cir, tiene un carácter reactivo, que se evidencia en el crecimiento de los éxodos y desplazamientos campesinos de los años noventa: como lo indican Salgado y Prada, las luchas campesinas no pudieron consolidar un cuerpo organizativo que las representara, ni llamar la atención del gobierno para que defendiera sus intereses, ni contener la agresión de los viejos y nuevos actores del campo. Esto significó la pérdida de gran parte de los logros acumulados durante el auge de las protestas campesinas de los años setenta (Salgado y Prada, 2000, 194).

Problema agrario, apertura económica y grupos paramilitares

En relación con los paramilitares, también es necesario establecer o restablecer la relación entre sus orígenes, sus posteriores trayectorias, la política y la cuestión agraria. En primer lugar, consideramos que el modelo de sustitución de importaciones implementado en los años sesenta y setenta, que terminó por favorecer los intereses de los sectores agroindustriales, puede ser interpretado como resultado de la negociación entre los terratenientes y la burguesía agroindustrial emergente (García y Montes, citados por Jaramillo, 2002, 44), que constituía la expresión económica y agraria del pacto político del Frente Nacional.

En segundo lugar, hay que señalar que el desmonte de ambos pactos en los años ochenta y noventa se concretó en los siguientes procesos: la apertura económica, que afectó en gran medida la agroindustria nacional subsidiada y protegida (Jaramillo, 2002, 61,69-90); la descentralización y la Constitución de 1991, entendidas como un intento de modernización y democratización de la política regional; y asimismo la expresión de un nuevo pacto político, resultado de negociaciones con grupos guerrilleros⁹.

⁹ Ocampo insiste en que “es imposible entender los procesos económicos y sociales de Colombia de los años noventa sin tener en cuenta la dialéctica entre los esfuerzos de modernización económica, representados por la apertura, y la búsqueda de un nuevo pacto político, cuya materialización más importante fue la Constitución de 1991” (Ocampo, 2004, 12).

Este contexto explica la rebelión de las elites locales y regionales contra el centro y su expresión armada –los grupos paramilitares–, con las respectivas consecuencias negativas para la democratización rural, tal como lo advirtiera Zamosc (1990, 360-367, 371-372) a comienzos de la década de los noventa.

Por eso gran parte de los cambios estructurales más importantes provocados en el sector agrícola colombiano, como el aumento de los cultivos permanentes en desmedro de los transitorios y la consolidación de las actividades pecuarias sobre las agrícolas –intensificadas especialmente en los años noventa (Salgado y Prada, 2000, 96; Jaramillo, 2002, 160)–, deben “leerse” en sus consecuencias políticas, ya que en muchos casos el proceso de ganaderización corre paralelo al apuntalamiento de los grupos paramilitares. La emergencia de estas nuevas elites, ligadas al narcotráfico, termina por añadir ingredientes más complejos a la ya difícil situación del sector agrario colombiano: ellas, centradas en la producción de rentas, crean sus propias normas y reglas del juego. Es decir, engendran su propia institucionalidad, muchas veces en contravía de la lógica de los terratenientes tradicionales, lo que modifica el panorama de las alianzas en el orden local y regional.

El impacto de la apertura económica afectó también a quienes percibían altos ingresos en el campo, o sea, los grandes inversionistas (Salgado y Prada, 2000, 113; Varios autores, 2002, 26). Por eso, hay que establecer precisamente las relaciones y las implicaciones que esta relativa crisis económica de las elites agroindustriales produjo en muchas regiones agrarias del país y sus efectos en el medio político, una de cuyas expresiones es el proceso de paramilitarización. Aún más: el futuro no es nada halagüeño, ya que la poca capacidad de adaptación de la economía agraria colombiana y del sector rural colombiano a los cambios provocados por la apertura económica de los años noventa puede profundizarse a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio, lo cual permitirá que la interacción entre las organizaciones armadas y la crisis del sector productivo agrario sea mayor. La firma del TLC se puede traducir en una crisis del campo colombiano, en el fortalecimiento de los sectores ilegales

y en la adaptación del campo y de las reglas del juego ilegales, es decir, en el fortalecimiento de las economías ilegales y los grupos armados.

La coca y el conflicto armado

El presente apartado tiene como principal objetivo discutir la explicación según la cual el proceso de inserción de los grupos armados en la economía de las drogas les ha permitido la obtención de mayores recursos y en consecuencia un crecimiento numérico de sus ejércitos y la mejora sustancial de su infraestructura militar.

Más bien se trata de analizar las relaciones económicas y sociales concretas que se establecen en las regiones cocaleras desde la perspectiva de la economía política, como lo hacen Gutiérrez, Fonseca y Rusqvist (2005) y Gutiérrez (2005). O bien siguiendo el curso de los trabajos pioneros, como el de Cubides, Jaramillo y Mora (1986), y más recientemente los análisis regionales y nacionales que se ocupan de la relación entre narcotráfico y grupos armados (Cubides, 2005; Duncan, 2005 y 2007; Gutiérrez y Barón, 2006; Ferro, 2004; Ferro y Uribe, 2004; González, 1998a y 1998b; Gross, 2004; Sinchi, 2000; Ramírez, 2001; Richani, 2003a y 2003b; Salgado, 2004 a y b; Tovar, 1999; López, 2006; Vargas, 2003 y 2004).

Por eso es necesario poner de presente que, detrás del objetivo de guerrilleros y paramilitares de luchar por el control de toda la cadena productiva de la economía ilegal de la coca, lo mismo que de las regiones y subregiones cuya economía tiene como principales elementos dinamizadores la coca, la cocaína y la amapola, también siguen jugando los “deseos” y los “modelos” de sociedad que los grupos armados quieren imponer a la sociedad colombiana en el orden cultural y político.

Pero igualmente, en la otra dirección, la intensificación de la guerra y los cambios en las condiciones estratégicas del conflicto armado impusieron cambios

en la economía política cocalera. Es cierto que “El narcotráfico genera recursos que financian a los actores armados y los actores armados ilegales debilitan al Estado y así facilitan el narcotráfico” (López, 2006, 408). Pero se trata de superar el lugar común según el cual el fenómeno, que erradamente denominamos “narcotráfico”, es la causa eficiente de todos los males nacionales.

Para comprender los cambios de estas relaciones hay que distinguir dos momentos históricos de la economía cocalera y cocainera colombiana: en una primera etapa, el país era solamente un procesador y exportador de drogas, y dejaba la labor del cultivo a cargo de Perú y Bolivia; en un segundo momento, la situación se caracteriza por el aumento de los cultivos y el auge del producción, que se inicia en 1993 y 1994 (Vargas, 2003, 18-19).

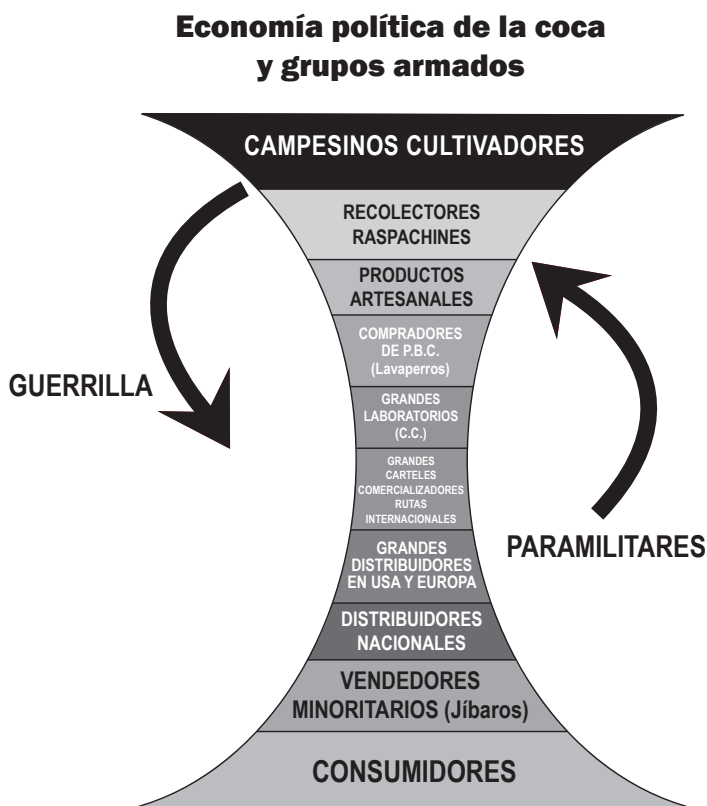
En la primera etapa, desde finales de los años setenta hasta mediados de los noventa, en la estructura del negocio predominaban los grandes “carteles”, que alcanzaron su máxima expresión de violencia hacia fines de los años ochenta, en el denominado narcoterrorismo (López, 2006, 408, 424-425).

La segunda etapa histórica recoge el ritmo originario de los años setenta y ochenta y la primera mitad de los noventa: se inicia a partir de la conversión de Colombia en país cultivador (López, 2006, 426) y tiene su mayor expresión social y política en el fenómeno de las marchas campesinas de 1996, realizadas en los departamentos de Guaviare, Caquetá y Putumayo y calificadas como evidencia de una alianza entre campesinos y las Farc. Pero antes, y de manera menos evidente, se venía gestando otro cambio, ya que, una vez desaparecidos los dos grandes carteles del narcotráfico, se inicia una nueva etapa de las relaciones entre narcotráfico y política. Las lecciones de la experiencia de Pablo Escobar fueron rápidamente aprendidas, especialmente “la necesidad de entrar en sintonía con los intereses locales y regionales distintos a los del negocio” (Cubides, 2005, 210).

En ambas etapas históricas se fue conformando una estructura social diferenciada y desigual en cuanto a la distribución económica y en relación con los

diferentes momentos de la cadena productiva, es decir, el cultivo, la transformación y la comercialización (Gutiérrez, Fonseca y Rusqvist, 2005, 92). De la misma manera, también se han verificado cambios en las relaciones de los grupos armados con las diferentes etapas de dicha cadena productiva, hasta llegar actualmente, en algunas regiones, a condiciones que han sido calificadas como de “duopsonio”, por el monopolio que ejercen los paramilitares y los guerrilleros, especialmente en las primeras etapas de la cadena productiva de las economías regionales de la coca (ibíd., 25, 60).

Esta estructura social diferenciada y desigual podemos caracterizarla de la siguiente manera:



En la base de la pirámide económica se encuentran los productores, que se dividen en tres grupos.

Están en primer término los pequeños cultivadores, de alrededor de tres o cuatro hectáreas, que en no pocas zonas tienen una movilidad muy marcada; se desplazan constantemente, cosa que contrasta con otros grupos de mayor arraigo e identidad en la zona, y permanecen más atados a sus tierras; en su mayoría, son campesinos y colonos para quienes los cultivos de coca se convirtieron en una economía de retaguardia (Tovar, 1999, 59-90; Gutiérrez, 2005, 53,61-66).

Al lado de estos productores aparecen los jornaleros o *raspachines*, que constituyen la masa de raspadores de coca que se desplazan de acuerdo con las temporadas de cosecha; en su mayoría, se trata de jóvenes urbanos y semiurbanos (Gutiérrez, 2005, 66-69).

En otro segmento se sitúan los medianos productores, que poseen entre tres y cuarenta hectáreas, quienes a veces no tienen un vínculo específico con la zona de producción y en la mayoría de los casos suelen emplear a administradores de sus fincas; en otros casos regionales, se han constituido en verdaderos empresarios locales de la coca, en alianza con alguno de los grupos armados (ibíd., 76-77).

Por último, aparecen en escena los grandes productores, que no tienen vínculos con los intermediarios ni tampoco concurren al mercado regional y local, sino que establecen relaciones directas con los grandes capitalistas ilegales, a quienes entregan por contrato cantidades significativas de materia prima. Asimismo hay grupos o eslabones intermedios, antes más independientes pero actualmente más relacionados con los grupos armados, como resultado del avance de paramilitares y guerrilleros que van en pos de monopolizar toda la cadena productiva; son los inversionistas o compradores de la materia prima y, la mayoría de veces, también exportadores de drogas, labor ésta que durante mucho tiempo estuvo monopolizada por los grupos paramilitares. La adquisi-

ción de la materia prima se hacía por intermedio de empleados que se desplazaban hacia las zonas productoras y establecían vínculos con intermediarios de la región, con la función de acopiar la pasta básica de cocaína (PBC), directa o indirectamente, aprovechando que poseían negocios de suministro de bienes y servicios en la zona. En muchas situaciones, esta parte de la cadena productiva, había estado vinculada con los grupos paramilitares (Vargas, 2003, 18-35; González, 1998a).

En cada una de esas etapas son distintos los actores sociales y económicos y los vínculos del narcotráfico con guerrilleros y paramilitares, pues el cambio de situación produce una gran heterogeneidad de arreglos horizontales, verticales y geográficos entre actores armados y narcotraficantes.

Es así como, durante gran parte de la década de los ochenta, los actores armados, en especial las guerrillas, solamente se limitaban a cobrar impuestos o defender los intereses de algunos de los actores de la cadena productiva. Posteriormente, durante la intensificación de la guerra, y a partir de mediados de la década de los noventa, se produce un proceso de mayor implantación de los actores armados en la producción y en la intensificación del control de las diferentes etapas de la cadena productiva del narcotráfico. Lo cual se tradujo, a finales de la década de los noventa, en disputas internas por el control de las diferentes economías regionales del narcotráfico y de las diversas etapas de la cadena productiva.

En el caso de las Farc, a finales de la década de los ochenta solamente cumplían la función de cobrar el impuesto de *gramaje* a los campesinos cocaleros de las zonas de colonización y de imponer precios de compra a los grandes narcotraficantes de pasta de coca que, por cuenta de los carteles, iban a las zonas de colonización. O sea, las Farc cumplían funciones de *sindicato armado* en defensa de los campesinos cultivadores, lo que definió en buena medida el carácter antagónico de sus relaciones con los paramilitares y los narcotraficantes (Richani, 2003b, 132). Posteriormente, y dada la intensificación del conflicto armado, las Farc pasaron de cobrar impuestos a fiscalizar parte de la

producción y luego a controlar toda la cadena productiva del sur del país, cambiando coca por armas y asumiendo funciones de Estado, como la regulación de las transacciones económicas y el control y penalización de los infractores (Richani, 2003b, 132). Esto no solo hacía parte de una estrategia económica sino que obedecía también a razones militares y políticas, ya que el proceso de comercialización y producción de la cocaína era percibido como más proclive a la creación de bases sociales del paramilitarismo.

Este estrecho relacionamiento de la economía cocalera con la dinámica del conflicto armado ha repercutido en importantes modificaciones de la interacción entre los campesinos y las Farc. Ya no se trata de la *colonización armada* (Ramírez, 1981) de los años sesenta y setenta sino, como anota este mismo autor, de que las Farc, “por lo menos al principio, no llegan a los campesinos a través de la coca sino que los encuentra en medio de los cultivos de coca” (Ramírez, 2005, 185). En los años noventa esto se transforma en funciones de regulación social y económica de las economías regionales cocaleras y cacaíneas. Este “encuentro” permitió que las Farc reforzaran sus pretensiones de vanguardia armada, ya que “El creciente desempleo rural y descomposición campesina, acelerada por la apertura comercial del gobierno de Gaviria, tuvieron una válvula de escape en los cultivos ilícitos. Ubicados en zonas de colonización cercanas a las Farc, los cocaleros, en sus distintos estratos, han formado la base social más sólida que jamás haya tenido grupo insurgente en Colombia desde época de las guerrillas liberales de la *Violencia*” (Palacios, 1999, 350).

Posteriormente, a finales de los años noventa, la guerrilla hizo el tránsito de mediador dentro de los circuitos de compra y venta de pasta básica a regulador también de la producción (Vargas, 2003, 238). La transformación ha tenido importantes implicaciones: en muchos casos los beneficios económicos derivados de sus vínculos con la coca han permitido procesos de acumulación de tierras que culminan paradójicamente en la privatización de las mismas, elemento que es funcional al poder político y económico que las guerrillas dicen combatir (Vargas, 2003, 239). Esto ha llevado a que, en muchas regiones del

país, se esté configurando una *guerrilla gamonalicia*; o sea, históricamente la guerrilla ha pasado de incentivar procesos de colonización en los años sesenta y setenta, a convertirse en compradora de tierras.

Actualmente las Farc van a seguir reproduciendo sus bases sociales y ampliando la economía de la guerra a través de su capacidad de inserción en los bordes e intersticios de regiones que no se integran efectivamente al mercado legal y la comunidad política nacional. Estrategia que une dos procesos simultáneos: de un lado, el incesante traslado de cultivos de coca, y, de otro, la reproducción de su experiencia histórica por el conducto de la colonización armada. Si bien la inserción en la economía cocalera les representa una ventaja económica y de reproducción social y política local, también limita seriamente su legitimidad ante sectores urbanos del país y la comunidad internacional. Incluso les crea problemas en el seno de su proyecto político, ya que lo que se presenta como adhesión a sus esquemas ideológicos es realmente una coincidencia temporal de intereses. Tan cierto es lo anterior, que cuando los paramilitares ofrecieron lo mismo, la gente, de igual forma, aceptó las autodefensas. Con todo, las Farc no quieren darse cuenta de que la reproducción social basada en la economía cocalera crea identidades sociales precarias, más sujetas al interés económico que a las identidades e ideales políticos fuertes, que son condición indispensable para un proyecto en el cual el sentido discursivo y la retórica política resultan centrales.

Por eso, el rediseño de las relaciones establecidas entre la economía cocalera y las guerrillas obliga necesariamente a regresar a la pregunta sobre las implicaciones que tuvo para las Farc el hecho de “permitir” la proliferación de los cultivos de coca en las comarcas de su influencia. Además, como en muchos casos, aquí también es importante no perder de vista que esta decisión se relaciona con las particularidades regionales (Ferro, 2004, 403; Ferro y Uribe, 2004, 134-135). Con palabras de Juan Guillermo Ferro, “específicamente creemos que la decisión de las Farc de permitir el cultivo de coca significó, por un lado ganar un espacio de legitimación, con algunos vaivenes frente a la población involucrada en estos cultivos, y, por otro lado, una pérdida de legiti-

midad frente a otros actores, y en general frente a la opinión pública que está por fuera de esa economía” (Ferro, 2004, 403). Sin embargo, este proceso de cocalización de las economías regionales provocó cambios en la relación con los diferentes actores de la cadena productiva: las Farc se concentran ahora en la actividad recaudadora sobre los compradores y disminuyen su presión sobre productores y recolectores (Ferro, 2004, 419; Ferro y Uribe, 2004, 134-135). Es decir, del cobro del gramaje y del establecimiento de reglas del juego entre cultivadores e intermediarios, pasó rápidamente a la transferencia de rentas del proceso de intermediación. Estos cambios de la relación con los actores implicaban una regulación policiva: “con el colono... siempre ha sido una relación buena, con los raspachines siempre ha habido una cierta renuencia por el tipo de personal que reúne el gremio, por ser personal flotante, por el hecho de que ellos tienen una conducta de emigración muy fuerte; entonces ellos no son estables en ninguna parte, entonces no son unas personas muy fiables” (testimonio de un campesino, citado por Ferro, 2004, 423).

Las relaciones de las Farc con los cultivos de coca han sido constantemente ambiguas. Inicialmente se opusieron e incluso reprimieron los cultivos de coca. Sin embargo, las presiones de los mismos campesinos y colonos terminaron en que la organización armada aceptara el fenómeno cuando se comprobó que su proliferación y control revertían en un flujo importante de recursos (Cubides, 2005, 130). Lo anterior muestra que esta cuestión es mucho más compleja que su enmarque simple y llanamente en lo que Ramírez llama “una ética política más preocupada por la escolástica de los valores que por los condicionamientos de un proceso bélico” (Ramírez, 2005, 184).

Esta interpretación diferente de la relación entre campesinos cocaleros, participación política y Farc no significa estar de acuerdo con el lugar común según el cual la pauperización, la marginación económica y la exclusión política de las zonas de colonización cocaleras explican la radicalización política de sus pobladores, y consiguientemente la fortaleza de las Farc en estas regiones. Precisamente, por el contrario, la coca permite procesos de elevación de las condiciones de vida de los colonos y campesinos por encima del nivel de

subsistencia, lo cual significa la obtención de recursos económicos más allá de las necesidades materiales básicas. El colono encontró en la coca la forma de capitalizar el trabajo familiar, incrementar su ingreso monetario y demorar así la descomposición de la economía campesina (Sinchi, 2000, 152). Este proceso de mejoramiento de las condiciones económicas contrasta con la exclusión política y estigma que pesa sobre el campesinado cocalero y es esa contradicción donde debe explicarse las movilizaciones de 1996.

Lo que queremos indicar es que los procesos de politización y movilización social no tienen como única explicación las denominadas desigualdades económicas, sino que en otros ámbitos hay muchas razones que incluso produjeron los fuertes procesos de politización y lucha que han mostrado los campesinos cocaleros en el Putumayo, donde lograron establecer diferentes tipos de alianzas y ampliar sus márgenes de acción frente a actores tan complicados y disímiles como las Farc, los paramilitares, la burocracia internacional, los Estados Unidos y el Plan Colombia.

Por su parte, a mediados de la década de los ochenta los paramilitares eran aliados del narcotráfico, es decir, de los grandes productores y comercializadores (Medina, 1990). Desde finales de la década de 1990 entran a disputar el control de las zonas cultivadas y de los campesinos cultivadores, especialmente en desarrollo de una estrategia militar y política desplegada en regiones como el sur de Bolívar, Meta (Gutiérrez, 2005, 2006), Catatumbo, Guaviare, Caquetá y Putumayo.

Las relaciones entre el paramilitarismo y el narcotráfico han sido cambiantes, como puede ser ejemplificado en el caso del Magdalena Medio, donde “lo que había surgido como grupos de escoltas y de guardianes de su patrimonio privado, por confluencia de intereses con los terratenientes tradicionales de Puerto Boyacá, se convierte luego en una organización para la guerra irregular, que se propone disputar el dominio territorial que había adquirido previamente la guerrilla, así como la hegemonía política de las fuerzas de izquierda en el municipio (Cubides, 2004, 386). Pero a poco andar, semejante salto cualitativo terminó por

desbordar las posibilidades financieras de la Asociación Colombiana de Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam), lo cual, sumado al proceso de compras masivas de tierras desplegado por Pablo Escobar y el “Mexicano”, permitió crear las condiciones para la inserción temprana del narcotráfico en este proyecto paramilitar (Gutiérrez y Barón, 2006, 290), caracterizado a su vez como la cuna del proyecto paramilitar nacional y la primera experiencia paramilitar “exitosa” en nuestro medio (Suhner, 2002, 171; Vásquez, 2006, 316).

Este cambio marcó una nueva etapa en los grupos paramilitares o de auto-defensa colombianos: de un lado, se operó una articulación de las diferentes estructuras, tanto de autodefensas como de narcotraficantes, en el proceso de centralización alrededor de la figura de Carlos Castaño. Es así como, para el año 2000, los paramilitares habían logrado combinar una estrategia militar concentrada en masacres, asesinatos y desplazamientos de población, una estrategia política como las marchas contra la zona del despeje con el ELN y una estrategia económica encaminada a lograr el control de enclaves importantes del cultivo y producción de coca, que comprendía 15.000 hectáreas en el Putumayo, 20.000 en el sur de Bolívar y 15.000 en el Catatumbo (Vargas, 2003, 25; Gutiérrez, 2005, 24-25, 141-145).

Este viraje significaba que estaban entrando a hacerse al control de un tramo de la cadena económica cocalera que durante mucho tiempo había estado bajo dominio de las Farc. En buena parte los paramilitares controlan desde entonces rutas claves del narcotráfico y las operaciones de lavado de dinero, es decir, ocupan un punto focal en la cadena internacional del crimen organizado (Richani, 2003b, 134). Al respecto, Cubides muestra que la relación de narcotraficantes y autodefensas ha venido adquiriendo características diferentes en diversos momentos: “hace mucho tiempo los paramilitares en su acción sobrepasaron esos intereses concretos; el narcotráfico viene siendo su logística, no la clave de su estrategia” (Cubides, 2004, 400).

Por eso conviene diferenciar, tanto temporal como espacialmente, las diversas relaciones que se han establecido en el proceso de contrarreforma agraria que

paramilitares y narcotraficantes han adelantado en muchas regiones del país: una cosa es la adquisición de tierras en procura de concentrarlas (Flórez, 2005, 10), proceso asociado a los poderes políticos regionales dentro de la frontera agraria, más frecuente en los años ochenta y comienzos de los noventa; y otro asunto es la provisión de tierras aptas y estratégicas para el cultivo y procesamiento de la coca en las zonas de frontera agraria y colonización (ibíd.), interés que hacia finales de los años noventa se suma al primero.

Esto ha convertido en un problema central hacer la diferenciación entre los grupos paramilitares relacionados con el narcotráfico y aquellos que se han mantenido al margen de esta actividad ilegal. Este es, sin duda, uno de los cuestionamientos persistentes que ha pesado sobre el actual proceso de diálogo entre estas agrupaciones armadas y el gobierno de Álvaro Uribe. Durante el proceso de negociación con el actual gobierno se hace evidente esa fragmentación de los grupos paramilitares, que tiene como elemento impulsor las diferencias alrededor de sus vínculos con el tráfico de narcóticos. El proceso termina por favorecer a “Don Berna” y a “Ernesto Báez”, en desmedro de la posición de sus dos fundadores, Mancuso y Carlos Castaño (Garzón, 2005, 90). Eso significa que el Bloque Central Bolívar ha terminado por imponerse sobre el proyecto unificador de las Autodefensas Unidas de Colombia.

El principal cambio entre las diferentes etapas de esas relaciones es el efecto que ha provocado la orden de la insurgencia de acabar con el sistema de intermediación de los comisionistas, para asumir directamente esa función. Por su parte, los paramilitares concentraron su actividad en las tareas de seguridad, especialmente en los cascos urbanos y en los epicentros de la comercialización, e iniciaron una actividad ofensiva especialmente contra los milicianos y las redes de apoyo de la guerrilla, urbanas y rurales (Vargas, 2003, 25).

Para finales de los años noventa se opera un giro radical en el comportamiento de las economías ilegales y en los actores involucrados con ellas: como reacción contra las marchas campesinas —debido a que ellas eran percibidas como portadoras de un gran “peligro”, por articular la protesta social con la lucha

guerrillera—, se desata una ofensiva paramilitar hacia la región sureña del país. Se inicia en 1997 con la masacre de Mapiripán (Meta), ocurrida en julio de 1997 (*Noche y Niebla*, julio-septiembre de 1997, 175-185), y continúa un año después con la de Puerto Alvira (Meta) (Vásquez, 1999, 84-93) y la incursión paramilitar en el bajo Putumayo (Vásquez, 1999, 84-93; González, Vásquez y Bolívar, 2003; Ramírez, 2001, 261-279). Una segunda sacudida del periodo es provocada por la ofensiva de las Farc contra las Fuerzas Armadas desplegada durante los años de 1997 y 1998, principalmente en los departamentos de Caquetá, Guaviare, Nariño y Putumayo, y que se expresa en el asalto a la base militar de Patascoy (Nariño), el ataque envolvente a la policía antinarcóticos de Calamar (Guaviare) y el asalto a la base militar de Las Delicias (Putumayo) (González, Vásquez y Bolívar, 2003). La tercera manifestación expresa la decisión de las Farc de intensificar su capacidad militar, puesta de manifiesto en la decisión de la guerrilla de controlar diferentes etapas de la cadena productiva de la economía cocalera, con el fin de contrarrestar la avanzada paramilitar.

La diversidad de estas expresiones provoca cambios drásticos en la relación entre los actores armados y la población en las zonas productoras de coca y cocaína, que pueden ser calificados como un proceso de institucionalización: se ordena censar la mano de obra, se intensifican los controles de ingreso a las zonas productoras y se adjudican responsabilidades a los dueños de las fincas.

En cuanto a la producción —primer nivel de la cadena de las drogas—, la relación entre grupos armados y economía se caracteriza por el control e imposición forzosa de los puntos de comercialización de la materia prima. En otros niveles del circuito, la articulación tiene que ver más con estructuras de lavado de activos, cuyas implicaciones para la macroeconomía son mayores porque no afectan solamente a la región sino también a importantes ciudades capitales de departamento y a otras actividades económicas. Allí se hace evidente la conexión de la economía del narcotráfico con altos niveles del ejercicio de la política (Vargas, 2003, 15-16).

Por otra parte, en esa relación entre economía ilegal de las drogas y ámbito político local y regional deben tenerse en cuenta los necesarios procesos de

institucionalización que implican los fines de acumulación económica, que llevan consigo la creación de una estructura paralela a las actividades legales y el desarrollo de cierto poder político, que muchas veces tiene mayor capacidad de acción que las mismas instituciones formales (ibíd., 16-17). Sin embargo, es importante tener en cuenta que el equilibrio en las relaciones entre lo formal y lo informal, lo legal y lo ilegal es siempre precario: no se trata del total y absoluto reemplazo de la economía legal por parte de la economía ilegal sino de una constante recomposición y negociación entre los dos espacios. Lo mismo sucede respecto de la relación del mundo de los negocios, especialmente los ilegales, con el de la política: aunque parezca paradójico, esta relación busca controlar el desorden y mantenerlo dentro de límites manejables (ibíd., 17).

Lo anterior hace que los arreglos locales y regionales sean bastante heterogéneos. En la primera modalidad, cuando se configura un modelo extractivo destinado a asegurar el suministro de materia prima a los narcotraficantes, es absolutamente irrelevante el control político; en otros casos, los narcotraficantes pueden actuar pragmáticamente para negociar condiciones de compra y venta con el actor armado que controla la zona, sin inmiscuirse en luchas ideológicas o competir por el poder local (ibíd., 17-18).

En cambio, en muchas otras regiones surge una imbricación y un fuerte proceso de interacción entre los narcotraficantes y los grupos paramilitares, cuya imposición de modelo económico, tanto legal como ilegal, pasa necesariamente por el control del poder político. Es el caso de la macro-región del Caribe (Duncan, 2005; Bernal, 2004a y 2004b), donde se hace necesaria la “captura” de actividades económicas y políticas que son propias de la esfera estatal y que se arrogan los grupos armados, en lo que podemos incluir cobro de impuestos, generalmente al comercio, la administración de justicia y el control militar y policial (Vargas, 2003, p. 13-14).

En conclusión, el “narcotráfico”, entendido como una nueva etapa de la economía agroexportadora colombiana, debe comprenderse a partir de su concreción territorial y social. Las expresiones territoriales del conflicto no

pueden reducirse exclusivamente a la disputa entre actores armados por recursos, en función del financiamiento de su guerra. El conflicto armado es, ante todo, una disputa por el monopolio de la fuerza y la coerción, que hace que la economía cocalera se halle todavía subordinada a una estrategia política, aunque también trate de garantizar el monopolio sobre los recursos económicos (ibíd., 6). Sin embargo, en muchos casos se impone la lógica económica, a tal grado que las Farc y las autodefensas se han permitido acuerdos para el establecimiento de nuevas zonas estratégicas de laboratorios de cristalización y puntos de embarque con condiciones de “seguridad”. Esta fase, antes monopolizada por los grupos paramilitares y los grandes carteles del narcotráfico, pasó ahora, de ser objeto de disputa con las Farc, a la posibilidad de concertar acuerdos entre guerrilleros y paramilitares que “aseguren” esta etapa de la cadena productiva frente a la acción estatal. Este cambio de situación puede ilustrarse con el caso de la región del Catatumbo, donde guerrilleros y paramilitares, luego de alcanzar niveles insospechados de violencia, llegaron a una repartición del territorio y de la cadena productiva por medio de un pacto mutuo de no agresión (Garzón, 2005, 71-72).

Esta práctica se está repitiendo en la costa pacífica nariñense. En otras palabras, se ha llegado a un punto de equilibrio inestable, donde los actores armados comparten entre sí la hegemonía para facilitar, en últimas, el “normal” comportamiento de la economía ilegal, de la cual tanto paramilitares como guerrilleros transfieren recursos importantes a sus propios fines y estrategias nacionales. Lo anterior no permite concluir que esta inserción en el control de los recursos de la economía cocalera y cocainera implique la desaparición gradual de las disputas entre los actores armados por el control de la población, porque, tal como lo anota Pécaut, en muchos casos resulta casi imposible deslindar el control de los recursos del control de la población (Pécaut, 2004, 84). Ni que no haya choques entre los fines personales de lucro, que caracterizan la actual estructura atomizada de narcotraficantes y paramilitares, y la búsqueda de la politización por parte de los paramilitares: las vicisitudes de ese proceso se manifestaron precisamente en la batalla política que perdió Carlos Castaño dentro del paramilitarismo.

Pero esta disputa por el control del territorio y de la cadena productiva hace surgir las preguntas sobre las razones que tienen los grupos armados para tolerar, relativamente, la presencia institucional en las áreas bajo su control, y hasta dónde es posible que esta situación se prolongue (Vargas, 2004, 317). Una explicación posible tiene que ver con el hecho de que tal permisividad es producto de la presión que ejerce la comunidad para acceder a los recursos que ofrecen las diferentes entidades públicas desplegadas en la subregión. Otra respuesta tiene que ver con la necesidad política de la insurgencia de no obstaculizar el compromiso del Estado, basado en el acuerdo sobre el hecho de que las políticas de desarrollo alternativo son una disyuntiva de la fumigación, pues la guerrilla no tendría ningún interés en asumir el costo político de esta última. Estamos, sin duda, frente a una insurgencia abierta y dispuesta incluso a la colaboración cuando se trate de una presencia estatal centrada en el desarrollo y la construcción de infraestructura. O sea, la guerrilla estaría dispuesta y abierta al “Estado de bienestar”, pero profundamente refractaria y reacia a cualquier presencia de aquellas instancias estatales que históricamente la han combatido, como el Ejército. O a aquellas que entren en competencia y colisión con el monopolio y la dispensa de justicia que ofrecen las guerrillas en estas regiones.

Finalmente, una mirada a la relación entre el conflicto armado y la economía de las drogas ilegales contribuye al conocimiento de la racionalidad de la guerra y de las estrategias de guerrilleros y paramilitares. No es casual que las definiciones estratégicas de la guerra que se libra en Colombia tengan actualmente como escenario el sur del país y particularmente las regiones más articuladas a las diferentes etapas de la cadena productiva de la economía cocalera. También cabe anotar que el proceso de imbricación entre actores armados y economías ilegales terminó por reforzar las tendencias de la política de seguridad global de la lucha antiterrorista, ya que, desde 1998, y especialmente a partir del 11 de septiembre de 2001, la lucha contra los grupos guerrilleros y la política de cero tolerancia a los cultivos ilícitos por parte de los Estados Unidos, que estuvieron diferenciadas durante mucho tiempo, se unificaron bajo una sola “cruzada” (Vargas, 2003, XI; Salgado, 2004; López, 2006, 430-431). Se

trata de insistir en los cambios de las relaciones entre globalización, seguridad y economías de guerra en escenarios de conflicto, lo cual permitiría entender el caso colombiano, no como una situación inédita sino como una experiencia que permite aproximarse a una situación de guerra o conflicto armado con un empleo extendido de la economía ilegal con fines de financiación de esta confrontación armada (Vargas, 2003, XII), pero también se debe tener en cuenta que muchas veces la implantación de tales sistemas impositivos y la función de regulación de dichas actividades por parte de los grupos armados despiertan lealtades y legitimaciones de los pobladores vinculados a las diferentes etapas de la economías ilegales, que son una oportunidad para la reproducción de las sociedades y los poderes locales (Gutiérrez y Sánchez, 2006, 25). Precisamente esa relación entre guerra y procesos de acumulación de capital originados en economías ilícitas, es lo que ha permitido que buena parte de la literatura se ocupe de la validez de los fines políticos de la lucha armada (Vargas, 2003, XII). En síntesis, el esfuerzo investigativo y analítico debe centrarse en la compleja relación entre guerra y cultivos ilícitos, sin reducir estos últimos a la imagen simplificada de finanzas de la guerrilla o de los paramilitares (ibíd., XIII).

A manera de conclusión

No hay duda alguna de que los recursos del narcotráfico se han convertido en un aspecto central del conflicto armado interno de Colombia. Sin embargo, la actual disputa entre guerrilleros y paramilitares no se puede reducir a una racionalidad estrictamente económica, ya que todavía son centrales los aspectos políticos, el papel del Estado y las instituciones, de las identidades y de los modelos de sociedad que promueven los grupos armados. Con mayor razón si, como intentamos demostrar en estas notas, el narcotráfico y las economías regionales de la coca son resultado y continuación del problema agrario, que a su vez constituye el trasfondo histórico del conflicto armado. Por eso hemos insistido en analizar más detenidamente la relación de coca y conflicto en dos vías: los diversos sectores que intervienen en la cadena productiva y la estructura desigual de sus “ganancias” y “beneficios” económicos, así como

las diferencias históricas y regionales de la inserción de los grupos armados en los diferentes momentos de la cadena productiva del narcotráfico.

Bibliografía

Bejarano, Jesús Antonio, 1998, *Economía de la agricultura*, Bogotá, Tercer Mundo Editores/Universidad Nacional/Iica.

Bernal, Fernando, 2004a, *Crisis algodonera y violencia en el Departamento del Cesar*, Bogotá, Pnud/Ministerio de la Protección Social.

-----, 2004b, “Economía y violencia en la construcción y debilitamiento de los derechos de propiedad en el departamento del Cesar”, en Castillo, Luis Carlos, editor, *Colombia a comienzos del nuevo milenio*, Cali, Universidad del Valle.

Collier, Paul, 2001, “Causas económicas de las guerras civiles y sus implicaciones para el diseño de las políticas”, en *Revista El Malpensante*, número 30.

Cubides Fernando; Jaramillo, Jaime Eduardo y Mora, Leonidas, 1986, *Colonización, coca y guerrilla*, Bogotá, Editorial Alianza.

Cubides Fernando, 2004, “Narcotráfico y guerra en Colombia: los paramilitares” en Sánchez, Gonzalo y Lair, Eric, editor, *Violencias y estrategias colectivas en la Región Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela*, Bogotá, Ifea/Grupo Editorial Norma.

-----, 2005, “Narcotráfico y paramilitarismo: ¿matrimonio indisoluble?”, en Rangel, Alfredo, editor, *El poder paramilitar*, Bogotá, Fundación Seguridad y Democracia/Planeta Colombiana.

Degregori, Carlos Iván, 1999, “Cosechando tempestades: las rondas campesinas y las derrotas de Sendero Luminoso en Ayacucho”, en Stern, Steve, editor,

Los senderos insólitos del Perú: guerra y sociedad, 1980-1995, Lima, Instituto de Estudios Peruanos/Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.

Duncan, Gustavo, 2005, *Del campo a la ciudad en Colombia. La infiltración urbana de los señores de la guerra*, Bogotá, Documentos Cede, Universidad de los Andes.

Fajardo, Darío, 2002, *Tierra, poder político y reformas agraria y rural*, Bogotá, Cuadernos Tierra y Justicia, número 1, Ilsa.

Ferro, Juan Guillermo, 2004, “Las Farc y su relación con la economía de la coca en el sur de Colombia: testimonios de colonos y guerrilleros”, en Sánchez, Gonzalo y Lair, Eric, editores, *Violencias y estrategias colectivas en la región andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela*, Bogotá, Ifea/Grupo Editorial Norma.

Ferro, Juan Guillermo y Uribe, Graciela 2004, “Las marchas de los cocaleros de departamento del Caquetá. Colombia: contradicciones políticas y obstáculos a la emancipación social”, en Santos, Boaventura de Sousa, y García, Mauricio, editores, *Emancipación social y violencia en Colombia*, Grupo Editorial Norma.

Flórez, Luis Bernardo, 2005, “La cuestión agraria, la democracia y la paz”, en *Economía Colombiana*, número 309, Bogotá, Contraloría General de la República.

Franco, María Carolina, 2006, *Institucionalidad, capital social y violencia: una caracterización desde la zona cafetera*, Bogotá, Universidad de los Andes/Ceso.

Garzón, Juan Carlos, 2005, “La complejidad paramilitar: una aproximación estratégica”, en Rangel, Alfredo, editor, *El poder paramilitar*, Bogotá, Fundación Seguridad y Democracia/Planeta Colombiana.

González, Fernán; Bolívar, Ingrid y Vásquez, Teófilo, 2003, *Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado*, Bogotá, Cinep.

González, José Jairo, 1998a, *Espacio y sociedad. La Amazonia colombiana*, Bogotá, Cinep.

-----, 1998b, “Regionalización y conflicto: Guaviare, Vichada y Guanía. De colonos, guerrilleros y chichipatos”, en *Conflictos regionales, Amazonia y Orinoquia*, Bogotá, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri)/ Fescol.

Gross, Christian, 2004 “Los campesinos de la cordillera frente a los movimientos guerrilleros y las drogas: ¿actores o víctimas?”, en *Guerra en Colombia: democracia y conflicto agrario*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia/ Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri)/Fundación para la Investigación y la Cultura (Fica).

Gutiérrez, Francisco y Barón, Mauricio, 2006, “Estado, control territorial paramilitar y orden político en Colombia. Notas para una economía política del paramilitarismo, 1978-2004”, en *Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia/Editorial Norma.

Gutiérrez, Francisco y Barón, Mauricio, 2008, “Órdenes subsidiarios. Coca, esmeraldas: la guerra y la paz”, en *Revista Colombia Internacional, número 67*, Universidad de los Andes, Bogotá, enero-junio.

Gutiérrez, Francisco y Sánchez, Gonzalo, 2006, “Prólogo”, en *Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia/Editorial Norma.

Gutiérrez, Omar, 2005, *Desarrollo rural alternativo y economía política de la coca en el Meta 1982- 2004*, Bogotá, Asdi/Pnund.

Gutiérrez, Omar; Fonseca, Daniel, Rusqvist, Anders, 2005, *Cultivos de uso ilícito en el sur de Bolívar: aproximación desde la economía política*, Bogotá, Asdi/Pnud.

Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), 2000, *Caquetá. Construcción de un territorio amazónico en el siglo XX*, Bogotá, Tercer Mundo Editores/Sinchi.

Jaramillo, Carlos Felipe, 2002, *Crisis y transformación de la agricultura colombiana, 1990-2000*, Bogotá, Fondo de Cultura Económica/Banco de la República.

Kaldor, Mary, 2001, *Las nuevas guerras: violencia organizada en la era global*, Barcelona, Tusquest Editores.

Kalulambi, Martín, 2003a, “Introducción, perspectivas comparadas de mercados de violencia”, en Kalulambi, Martín, editor, *Perspectivas comparadas de mercados de violencia*, Bogotá, Universidad Nacional/Alfaomega.

-----, 2003b, “Guerras africanas, lógicas depredadoras y el negocio de los Kalachnikov”, en Kalulambi, Martín, editor, *Perspectivas comparadas de mercados de violencia*, Bogotá, Universidad Nacional/Alfaomega.

Kay, Cristóbal, 2003, “La estructura agraria y la violencia rural en América Latina”, disponible en <http://www.scielo.br/pdf/soc/n10/18720.pdf>, fecha de consulta: 16 de enero de 2007.

Lock, Peter, 2003, “Transformaciones de la guerra. Hacia la dominación de la violencia reguladora”, disponible en <http://www.fsmt.org.co/ponencias2.htm?x=19964>, fecha de consulta: 26 de julio de 2003.

López, Andrés, 2006, “Narcotráfico, ilegalidad y conflicto en Colombia”, en *Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia/Grupo Editorial Norma.

Machado, Absalón, 1998, *La cuestión agraria en Colombia a fines del milenio*, Bogotá, El Ancora Editores.

-----, 2002, *De la estructura agraria al sistema agroindustrial*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.

Machado, Absalón y Samacá, Henry, 2000, *Las organizaciones del sector agropecuario: un análisis institucional*, Bogotá, Colciencias/Cega/Tercer Mundo Editores.

Mondragón, Héctor y Valderrama, Mario 1998, *Desarrollo y equidad con campesinos*, Bogotá, Iica/Finagro/Tercer Mundo Editores.

Moore, Barrington, 1973, *Los orígenes sociales de la dictadura y de la democracia*, Barcelona, Ediciones Península.

Münkler, Herfried, 2005, *Viejas y nuevas guerras. Asimetría y privatización de la violencia*, España, Siglo XXI Editores.

Ocampo, José Antonio, 2004, *Entre las reformas y el conflicto. Economía y conflicto en Colombia*, Bogotá, Grupo Editorial Norma.

Palacios, Marco, 1999, “La solución política al conflicto armado: 1982-1997”, en: Leal, Francisco y Camacho, Álvaro, compiladores, *Armar la paz es desarmar la guerra*, Bogotá, Cerec/Fescol/Iepri.

Pécaut, Daniel, 2004, “Conflictos armados, guerras civiles y política: relación entre el conflicto colombiano y otras guerras contemporáneas”, en: Castillo, Luis Carlos, editor, *Colombia a comienzos del nuevo milenio*, Cali, Universidad del Valle.

Ramírez, María Clemencia, 2001, *Entre el Estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía. El movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo*, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia/Colciencias.

Ramírez, William, 1981, “La guerrilla rural en Colombia: ¿una vía para la colonización armada?”, en *Estudios rurales latinoamericanos*, vol. 4, número 2, Bogotá, Estudios Rurales Latinoamericanos.

Revista Noche y Niebla, 1997, julio-septiembre, Bogotá, Cinep.

Richani, Nazih, 2003a, *Sistemas de guerra: la economía del conflicto en Colombia*, Bogotá, Iepri/Editorial Planeta.

-----, 2003b, “Conflictos intrincados: economías políticas de los sistemas de guerra de Líbano y Colombia”, en Kalulambi, Martín, editor, *Perspectivas comparadas de mercados de violencia*, Bogotá, Universidad Nacional/Alfaomega.

Salgado, Carlos y Prada, Esmeralda, 2000, *Campesinado y protesta social en Colombia, 1980-1995*, Bogotá, Cinep.

Salgado, Henry, 2004a, “El Plan Colombia, una política de (in)seguridad para las poblaciones del Putumayo”, en *Desplazamiento forzado, dinámicas de guerra, exclusión y desarrollo*, Bogotá, Universidad Nacional.

-----, 2004b, Informe final de la investigación “Construcción de ciudadanía y región en un contexto internacional de guerra contra las drogas y el terrorismo: el caso del Putumayo”, mimeo, Cinep/Icanh/Colciencias.

Suhner, Stephan, 2002, *Resistiendo al olvido: tendencias recientes del movimiento social y de las organizaciones campesinas en Colombia*, Bogotá, Taurus/Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social.

Tovar, Hermes, 1999, *Colombia: droga, economía, guerra y paz*, Bogotá, Temas de hoy/Planeta Editores.

Vargas, Ricardo, 2003, *Drogas, conflicto armado y desarrollo alternativo, una perspectiva desde el sur de Colombia*, Bogotá, Acción Andina.

-----, 2004, “Conflicto armado, narcotráfico y fronteras en el sur de Colombia: el caso del Putumayo”, en Sánchez, Gonzalo y Lair, Eric, edi-

tores, *Violencias y estrategias colectivas en la región andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela*, Bogotá, Ifea/Grupo Editorial Norma.

Varios autores, 2002, “El campesinado en la economía y la sociedad colombiana”, Bogotá, mimeo, Ilsa.

Vásquez, Teófilo, 1999, “Un ensayo interpretativo sobre la violencia de los actores armados en Colombia”, en *Revista Controversia*, número 175, Cinep, Bogotá.

-----, 2006, “Dinámicas, tendencias e interacciones de los actores armados en el Magdalena Medio, 1990-2001”, en *Conflictos, poderes e identidades en el Magdalena Medio, 1990-2001*, Bogotá, Cinep/Colciencias.

Zamosc, León, 1990, “El campesinado y las perspectivas para la democracia rural”, en Leal, Francisco y Zamosc, León, editores, *Al filo del caos. Crisis política en la Colombia de los años 80*, Bogotá, Tercer Mundo Editores/Iepri/Universidad Nacional.

-----, 1992, “Transformaciones agrarias y luchas campesinas en Colombia: un balance retrospectivo (1950-1990)”, en *Análisis Político*, número 15, Iepri, Bogotá.